

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

TN/RL/M/14

18 de mayo de 2004

(04-2168)

Grupo de Negociación sobre las Normas

Original: inglés

INFORME RESUMIDO DE LA REUNIÓN CELEBRADA LOS DÍAS 26 Y 28 DE ABRIL DE 2004

Nota de la Secretaría

1. El Grupo de Negociación sobre las Normas ("el Grupo") celebró una reunión formal los días 26 y 28 de abril de 2004.

A. ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

2. El Grupo adoptó el siguiente orden del día:

A. ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

B. MEDIDAS ANTIDUMPING

C. SUBVENCIONES Y MEDIDAS COMPENSATORIAS, INCLUIDAS LAS SUBVENCIONES A LA PESCA

D. OTROS ASUNTOS

- Fecha de la próxima reunión del Grupo.

B. MEDIDAS ANTIDUMPING

3. El grupo examinó dos nuevas comunicaciones. La primera, titulada "**Propuestas sobre la determinación del valor normal**" (TN/RL/W/150), estaba patrocinada por 11 participantes. Un copatrocinador explicó que en el documento se exponían cuatro propuestas para fortalecer las disciplinas relativas a la determinación del valor normal con arreglo al artículo 2 del Acuerdo Antidumping.

4. La primera propuesta tenía por objeto aclarar el "criterio de cantidad suficiente", o "prueba de viabilidad del 5 por ciento". El copatrocinador explicó que, debido a la ausencia de normas claras, las prácticas de los Miembros en esta esfera variaban y que las facultades discrecionales otorgadas a las autoridades investigadoras socavaban la equidad del procedimiento. El documento proponía que se aplicase el criterio de cantidad suficiente al comienzo de la investigación sobre las ventas del producto similar en su conjunto en el mercado interno del país exportador, incluidas las que posteriormente no se considerasen realizadas en el curso de operaciones comerciales normales, puesto que era esencial tanto para las autoridades como para los demandados conocer desde el principio qué datos se utilizarían en el cálculo del valor normal. Se proponía asimismo una definición más clara del significado de la expresión "ventas en el mercado interno".

5. La segunda propuesta se refería a la aclaración de la frase "en el curso de operaciones comerciales normales". En el documento figuraba una lista exhaustiva de tipos excepcionales

específicos de ventas que se debían considerar fuera del curso de operaciones comerciales normales. Además, proponía que el criterio de ventas a precios inferiores a los costos se aplicase con respecto al valor y los costos agregados de todas las ventas del producto similar durante el período objeto de investigación y no tomando como base una transacción específica. Esta propuesta se basaba en la práctica comercial, puesto que las compañías no determinaban por lo general la rentabilidad de sus operaciones sobre la base de una transacción específica, sino sobre la base de una línea de productos.

6. La tercera propuesta era la mejora de las disciplinas relativas a las facultades discrecionales de las autoridades investigadoras, que habían permitido la imposición de una carga excesiva a los demandados, exigiéndoles que volvieran a calcular los datos sobre costos a partir de una clasificación específica diferente de la utilizada en sus sistemas contables normales. Teniendo en cuenta las prácticas comerciales, el documento proponía que el período de recopilación de datos correspondiera al ejercicio o período económico de los demandados y que la autoridad aceptara los datos de éstos siempre que estuvieran en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

7. Por último, en el documento se proponía la aplicación de disciplinas rigurosas en el cálculo del valor normal reconstruido. Se indicaba que las autoridades deberían utilizar, en todas las circunstancias, datos reales relacionados con la producción y las ventas de los demandados y se proponía una norma específica sobre el nivel de beneficio que habría que utilizar al calcular el valor reconstruido en los casos en los que las ventas en el mercado interno no cumplieran el criterio de ventas a precios inferiores a los costos agregados.

8. Otros copatrocinadores realizaron un análisis detenido del documento. Se expresó preocupación acerca de la vaguedad de las disposiciones vigentes relativas al valor normal. En el documento se abordaba el sesgo de las metodologías, que en muchos casos daba pie para descartar una proporción potencialmente importante de transacciones comerciales normales. Se proponía asimismo mejorar las disciplinas relativas a la metodología aplicable en el caso de que las autoridades utilizaran valores normales reconstruidos. Se alentó a los participantes a estudiar el mejor enfoque para realizar la prueba de viabilidad, así como diferentes sistemas para el valor normal reconstruido, por ejemplo cuál sería el nivel de beneficio apropiado cuando el precio de venta fuera inferior al costo total pero aún así contribuía a recuperar una determinada proporción del costo fijo. Se pidió a los participantes que indicaran cuál debía ser el "Y" por ciento mencionado en la propuesta relativa a las ventas a precios inferiores a los costos a fin de determinar una parte sustancial de dichas ventas y si sus sistemas contables estaban en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Se observó que los patrocinadores presentarían propuestas adicionales en la esfera de la comparación equitativa.

9. Con respecto al período de recopilación de datos y de investigación, un participante propuso que, en relación con el dumping, dicho período comenzara el mes de la iniciación de la investigación y cubriera exactamente los 12 meses anteriores. Otro participante preguntó si la rama de producción nacional tendría que sufrir los daños durante 12 meses antes de que se pudiera iniciar la investigación y qué ocurriría si el dumping sólo comenzaba en los seis últimos meses del período. Con respecto a la propuesta de permitir que los demandados presentaran datos sobre la producción y las ventas para un ciclo completo del producto, un participante preguntó si esto significaba que cuando el mercado mundial estuviera en fase descendente y la rama de producción nacional estuviera ya vendiendo con pérdidas habría que aceptar que se admitieran productos vendidos a precios que no cubrían los costos. Un participante no tenía problema con la propuesta del período de 12 meses, pero subrayó que había que actuar con flexibilidad. También se pidieron aclaraciones con respecto a si las investigaciones antidumping se debían limitar al suministro de datos relativos a los costos para el año anterior a la iniciación de la investigación o si los datos debían ser los más recientes que la autoridad investigadora pudiera conseguir. Se observó asimismo que, aunque la autoridad investigadora debía utilizar siempre que fuera posible un ejercicio fiscal o contable de la compañía, estos períodos podían variar de una compañía a otra del país y había que utilizar el mismo período para todas ellas.

10. Con respecto al criterio de cantidad suficiente, un participante recordó que una de las primeras decisiones que se debían adoptar en cualquier investigación era que se utilizara el mercado como base para el valor normal. A fin de evitar cargas innecesarias derivadas de la presentación de informes, esta decisión se solía adoptar basándose en respuestas iniciales limitadas que indicaban el volumen y valor del mercado agregados, así como otra información general. Por este motivo, el criterio de cantidad suficiente se debía aplicar de la manera más sencilla posible, pero siempre susceptible de dar un resultado válido. Un participante preguntó acerca de la situación en la que se determinase que se habían realizado ventas suficientes, pero que al realizar la investigación no se hubieran encontrado ventas en el curso de operaciones comerciales normales. Otro participante convino en que la prueba de viabilidad se debía realizar al comienzo mismo, incluyendo también las ventas que, durante una investigación, pudieran resultar no realizadas en el curso de operaciones comerciales normales.

11. Con respecto a la utilización de los libros y registros de los demandados, un participante recordó que en el párrafo 2.1.1 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping se establecían estos libros y registros como la base normal para la información contable, si estaban en conformidad con los principios locales de contabilidad generalmente aceptados. Sin embargo, los patrocinadores describieron incorrectamente la utilidad de los principios de contabilidad generalmente aceptados en el marco de un procedimiento antidumping. Con la excepción de determinados gastos, incluidos como "costos de las mercancías vendidas", estos principios no abordaban la asignación de gastos fijos a las unidades de productos o la forma en la que se habían de asignar a cada producto. Así pues, la declaración de que un determinado conjunto de libros o registros estaba en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados no garantizaba que se hubieran asignado de manera adecuada los costos de producción basados en esos registros. La propuesta confería a las compañías una amplia facultad discrecional para representar incorrectamente sus costos. El problema más común, que no se abordaba en el documento, se presentaba cuando un demandado pedía a la autoridad investigadora que aceptase los costos asignados sobre una base distinta de la que utilizaba la compañía en sus libros y registros normales. Otro participante expresó su acuerdo, observando que el punto esencial era que las compañías indicaban asignaciones específicas que con frecuencia proponían sólo en el marco de una investigación antidumping y que en la práctica solían asignar de manera diferente. Otro participante pidió aclaración con respecto a las expresiones "estado financiero sin consolidar" y "estados financieros internos". ¿Se preparaban estos estados basándose en los principios de contabilidad generalmente aceptados del país exportador? ¿Los comprobaba un contable público autorizado? ¿Cómo se garantizaría su precisión y cuál debería ser el período pertinente que se habría de examinar durante la investigación? Otro participante indicó que las propuestas relativas a la aceptación de los datos en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados y el nivel de especificidad requerido no tenían en cuenta la práctica de las determinaciones de la existencia de dumping.

12. Con respecto a las ventas en el curso de operaciones comerciales normales, un participante dijo que consideraba que convendría mejorar la definición de lo que se debía incluir y excluir en relación con las ventas a los empleados, teniendo en cuenta que éstas podían ser una parte importante de las ventas de la compañía. Otro participante observó que estaba la cuestión de la manera de definir las ventas en el curso de operaciones comerciales normales y lo que habría que incluir o excluir en tal definición. Con respecto a las ventas a las partes vinculadas, había diferentes enfoques y opiniones y las consecuencias eran importantes.

13. En relación con la propuesta de que las autoridades pidieran información sobre los costos sólo cuando en la reclamación hubiera información suficiente relativa a las ventas a precios inferiores a los costos, un participante preguntó cómo se cumplía en esto la obligación establecida en el apartado 3 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping de proporcionar pruebas suficientes para que justificasen la iniciación de una investigación, en particular teniendo en cuenta que esta disposición no exigía al solicitante que facilitara información detallada que pudiera utilizarse durante el curso de la

investigación. Otro participante preguntó si la propuesta llevaría a una situación en la que la autoridad investigadora no podría ya jamás pedir datos relativos a los costos. También se observó que dicho enfoque requeriría datos sobre los costos específicos de la compañía, que probablemente no tendrían los solicitantes.

14. Con respecto a la propuesta de realizar una determinación de las ventas a precios inferiores a los costos para las del producto similar en su conjunto, un participante dijo que consideraba que la propuesta no abordaba las preocupaciones relativas a las ventas selectivas a precios inferiores a los costos. Otro participante estimaba que la propuesta se desviaba de la obligación contenida en el párrafo 4 del artículo 2 de realizar una comparación equitativa. En ese enfoque se negaba el derecho a establecer valores normales diferentes para modelos, tipos o calidades distintos de un producto determinado y proponía en cambio una prueba global. ¿Que pasaría si la gama de productos destinada al mercado interno y la gama exportada fueran completamente diferentes? La propuesta obligaría a que una autoridad investigadora comparara el precio de ciertos modelos de exportación con los precios que producían pérdidas en el mercado del país exportador.

15. En cuanto a la propuesta de eliminar la frase "situación especial del mercado", un participante observó que esto requería una reflexión a fondo, puesto que esta cláusula se había utilizado en situaciones de las que no se habían ocupado los negociadores de la Ronda Uruguay. Se podrían plantear problemas con respecto a las economías en transición, casos en los que el mercado se encontraba en una situación particular debido a la interferencia del gobierno o a la existencia de una situación de monopolio y, si se eliminara la fórmula general de la situación especial del mercado, habría que estudiar todas estas circunstancias. Otro participante dijo que consideraba que los participantes debían indicar casos en los que se habían basado en la existencia de una situación especial del mercado para no tener en cuenta ciertas ventas. Opinaba que la expresión "situación especial del mercado" no se podía considerar aplicable a casi ninguna serie de circunstancias.

16. En relación con el valor normal reconstruido, un participante observó que los cambios propuestos reflejaban la opinión de que los costos y beneficios de las ventas debían basarse en la contabilidad de cada compañía. El problema era que la autoridad investigadora podría no encontrar datos específicos fidedignos de la compañía para el producto similar y que la compañía podría no tener ventas de productos de la misma categoría general. Al examinar estas circunstancias, en el Acuerdo Antidumping se reconocía que para un producto había un mercado y en este mercado los agentes probablemente actuarían en condiciones semejantes. En cuanto a la propuesta de utilizar un coeficiente de beneficio cero en algunas circunstancias, esto no se podía considerar un beneficio "razonable", puesto que las compañías que no tuvieran beneficios interrumpirían su actividad comercial. Igualmente, ¿por qué se debían excluir los costos administrativos y de carácter general al reconstruir el valor normal cuando existían dichos costos? Otro participante señaló que el párrafo 2.2 del artículo 2 no daba una orientación precisa sobre la manera de utilizar las tres metodologías alternativas para determinar los gastos administrativos y de carácter general y los beneficios a la hora de calcular el valor reconstruido. Así pues, había que mejorar la certidumbre jurídica para la aplicación de esta disposición.

17. Un copatrocinador respondió a algunas de las observaciones formuladas. En situaciones en las que el producto similar no fuera objeto de venta en el curso de operaciones comerciales normales, era inevitable el recurso al valor reconstruido. Sobre la cuestión de los mercados cíclicos, si hubiera una pauta establecida, la compañía fijaría su precio de manera que pudiera obtener beneficios durante el ciclo completo. Esto se había de tener en cuenta al determinar si la compañía estaba obteniendo beneficios. En cuanto a la propuesta de exigir que en la reclamación se incluyeran alegaciones sobre las ventas a un precio inferior a los costos y su conexión con el párrafo 3 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping, había una relación y era necesario estudiar más a fondo el tipo de información que habrían de presentar los solicitantes. En cuanto a las "situaciones especiales del mercado", esta cuestión se debía abordar en el marco de lo que constituía una venta en el curso de operaciones

comerciales normales. Con respecto a la gama de productos, esta era una cuestión importante y ciertamente podía cambiar el resultado del cálculo del valor normal y la comparación equitativa. No obstante, incluso en el caso de que hubiera modelos diferentes del producto objeto de investigación, las compañías normalmente determinaban el precio de manera que pudieran obtener beneficios sobre la base de una línea de productos. Así pues, se debía aplicar el criterio de ventas a precios inferiores a los costos para el producto similar en su conjunto.

18. El segundo documento presentado se titulaba "**Tres cuestiones identificadas para su examen por el Grupo de Negociación sobre las Normas**" (TN/RL/W/153). La primera cuestión se refería a las pequeñas economías y al establecimiento de autoridades regionales encargadas de las medidas comerciales correctivas. El patrocinador recordó al Grupo que se había planteado anteriormente la idea de establecer dichas autoridades con el fin de tener en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y menos adelantados. El patrocinador había propuesto que el Grupo examinara cuál podría ser el funcionamiento de esas autoridades regionales y debatiera los cambios que tal vez fuera necesario introducir en el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC). Así pues, el patrocinador planteó al Grupo algunas preguntas iniciales, entre ellas: ¿Percibirían las autoridades comerciales regionales los derechos para todos los Miembros o eran las autoridades nacionales las encargadas de la percepción? En las investigaciones iniciadas ante dicha autoridad, ¿se examinarían las importaciones y la rama de producción nacional con respecto a cada Miembro o con respecto a todos los Miembros de la región? Si se adoptaran medidas, ¿serían aplicables a las importaciones de un solo Miembro o a las de todos los Miembros de la región?

19. La segunda pregunta se refería al derecho de los Miembros a distribuir las cantidades percibidas por derechos antidumping y compensatorios. Esta cuestión se había examinado en el marco del mecanismo de solución de diferencias y en los exámenes de la legislación de los Miembros llevado a cabo en los Comités Antidumping y de Subvenciones y Medidas Compensatorias. Aunque era indudable que los países tenían el derecho soberano de distribuir los ingresos públicos como estimasen conveniente, varios Acuerdos de la OMC imponían ciertas disciplinas en cuanto a la forma en que se distribuían dichos ingresos. Por ejemplo, el carácter de esas disciplinas era en gran medida el objeto del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. Una pregunta importante era si, como había indicado el Órgano de Apelación, las cantidades percibidas por derechos antidumping y compensatorios deberían ser objeto de limitaciones especiales que no eran aplicables a ingresos públicos percibidos de otras fuentes. Teniendo en cuenta lo expuesto, consideraba que el Grupo debería examinar el reconocimiento del derecho de los Miembros a distribuir dichas cantidades.

20. En la tercera pregunta se refirió a los hechos de que se tenga conocimiento. El patrocinador observó que la mejor fuente de información para toda determinación estaba constituida por los datos reales de las partes declarantes; no obstante, esos datos estaban bajo el control de esas partes, que podían decidir si participaban o no en una investigación antidumping y en qué medida lo hacían. Por consiguiente, el Acuerdo Antidumping contenía un delicado equilibrio de derechos y obligaciones entre los Miembros importadores y exportadores que alentaba a las partes declarantes a facilitar toda la información verificable necesaria para que las autoridades administrativas realizaran la investigación. Este equilibrio quedaría perturbado si una parte declarante pudiera seleccionar libremente el tipo de información que presentaba, según considerase o no que la información concreta era beneficiosa para sus intereses. Los Miembros deberían considerar si se debía aclarar el Acuerdo Antidumping con el fin de asegurar que las partes declarantes tuvieran un incentivo para facilitar toda la información necesaria y no para hacerlo de manera selectiva o para tergiversar el significado de la información. Los Miembros también deberían examinar si en esta esfera habría que armonizar las normas entre el Acuerdo Antidumping y el ASMC.

21. Varios participantes mostraron interés por la idea de establecer autoridades regionales encargadas de las medidas comerciales correctivas. Se observó que las autoridades regionales podían

representar un sistema práctico para dar facilidades a las pequeñas economías que carecían de recursos para mantener una autoridad nacional. Esta unificación de esfuerzos podía llevar a una eficacia que se plasmaría en un importante ahorro en los costos. Se invitó a las pequeñas economías a dar a conocer sus experiencias e intereses sobre esta cuestión. Dos participantes hicieron observar que sólo se podían aplicar medidas a más de un Miembro en el caso de una unión aduanera, y que sólo en este contexto se debía aplicar una medida antidumping o en materia de derechos compensatorios a más de un Estado.

22. Con respecto a la distribución de las cantidades percibidas por derechos antidumping y compensatorios, varios participantes observaron que la propuesta hacía referencia a la Ley de compensación por continuación del dumping o mantenimiento de las subvenciones de 2000, conocida como Enmienda Byrd, que se había constatado que era incompatible con el Acuerdo sobre la OMC. Consideraban que el Grupo de Negociación no era el foro apropiado para examinar esta cuestión. Se plantearon cuestiones relativas al objetivo del documento y si representaba una desviación de la opinión del patrocinador de que cualquier cambio debía preservar los conceptos y principios básicos de los acuerdos. Un participante señaló que, aunque en el documento se declaraba que el patrocinador tenía intención de cumplir con sus obligaciones en el marco de la OMC, no estaba claro si había señalado esta cuestión con vistas a cambiar las normas para justificar la Enmienda Byrd. En esta negociación no se aceptaría nunca tal resultado. Otro participante observó que, a pesar de la resolución del Órgano de Solución Diferencias, todos los participantes tenían derecho a plantear cualquier cuestión que desearan negociar en el Grupo, sin perjuicio del resultado. Si el patrocinador deseaba dedicar su capital político a esta cuestión, tenía todo el derecho a hacerlo.

23. Con respecto a los hechos de que se tenga conocimiento, diversos participantes estuvieron de acuerdo en que la mejor fuente de información para una determinación de antidumping era la que proporcionaba el demandado y acogían con agrado los debates sobre el uso de los hechos de que se tuviera conocimiento. Sin embargo, algunos participantes no estaban acuerdo en que el Acuerdo Antidumping fuera equilibrado, puesto que permitía a las autoridades utilizar los hechos de que tenían conocimiento aun cuando el demandado hubiera procedido en toda la medida de sus posibilidades y hubiera cooperado plenamente. Se señaló otra propuesta, según la cual los hechos de que se tuviera conocimiento sólo podrían utilizarse en sustitución de la información faltante o rechazada y se pediría a las autoridades que utilizaran toda la información necesaria presentada por los demandados, siempre que dicha información fuera verificable y se presentara de la manera adecuada. Aunque algunos participantes respaldaron la concesión de incentivos para la cooperación, otros expresaron preocupación, porque la propuesta podría en último término distraer a los demandados del suministro de la información. En lo que se refiere a la armonización entre el Acuerdo Antidumping y el ASMC, un participante estaba dispuesto a examinar la armonización en la medida en que las circunstancias no fueran diferentes. Se refirió en este sentido a los contratos privados/públicos, con respecto a los cuales podría ser ilegal revelar información.

24. El patrocinador indicó que el documento tenía por objeto señalar temas que podían interesar al Grupo. Todos los Miembros tenían derecho a presentar cuestiones, incluso si éstas eran controvertidas. En relación con las autoridades regionales, observó que había un consenso abrumador para que continuasen los debates. Con respecto a la distribución de las cantidades percibidas, el patrocinador se refirió a la nota 6 de pie de página del documento, confirmando su intención de cumplir plenamente con sus obligaciones en el marco de la OMC.

C. SUBVENCIONES Y MEDIDAS COMPENSATORIAS, INCLUIDAS LAS SUBVENCIONES A LA PESCA

25. El Grupo examinó un documento titulado **“Subvenciones a la pesca: exceso de capacidad y explotación excesiva”** (TN/RL/W/154). El patrocinador consideraba que el mandato de Doha sobre las subvenciones a la pesca estaba relacionado con los objetivos ecológicos, comerciales y de desarrollo. La cuestión era la forma que podían adoptar las nuevas disciplinas. Era importante

conseguir una estructura que ofreciera normas eficaces que contribuyeran verdaderamente a la reforma de la economía del sector y que fueran sólidas a largo plazo. Había puntos comunes importantes en las tres comunicaciones de otros participantes que ofrecían propuestas iniciales: en cada una de ellas se pedía una prohibición como punto de partida de las nuevas disciplinas. El patrocinador adoptó la misma posición: basándose en la experiencia adquirida, tenía serias dudas acerca de la utilidad de elaborar nuevas disciplinas sobre subvenciones recurribles. Era mejor simplificar, y sencillamente prohibir las subvenciones que contribuyeran a crear problemas en el sector. En cuanto a lo que se debería prohibir, las comunicaciones anteriores se concentraban en el exceso de capacidad y, en cierta medida, en la sobrepesca y la explotación excesiva. Si bien era importante abordar el exceso de capacidad, esto no era suficiente. Había que concentrarse en las repercusiones de la pesca sobre las poblaciones de peces, que eran el resultado tanto de la capacidad como de la actividad o el *esfuerzo pesquero*. Mientras que la preocupación por la capacidad se centraba en los costos de capital, la preocupación por el esfuerzo se debía centrar también en los costos de explotación. La reforma del sector exigía disciplinas eficaces para ambos. El patrocinador señaló que exigir que los demandantes en un procedimiento de grupo especial de la OMC demostraran el exceso de capacidad y la sobrepesca causaría problemas. Así pues, proponía que se tuvieran en cuenta los efectos en los gastos y los ingresos como base para los nuevos criterios. Propuso una prohibición de carácter amplio, aplicable, en principio, a toda la gama de programas susceptibles de contribuir al exceso de capacidad o la sobrepesca u otras distorsiones del comercio, con la reducción de los costos fijos o variables o el aumento de los ingresos como criterios básicos aplicables. Esta prohibición se tendría que equilibrar mediante una serie de excepciones negociadas, junto con disposiciones transitorias realistas desde los puntos de vista político y comercial.

26. Diversos participantes convinieron en que las disciplinas sobre las subvenciones a la pesca debían centrarse en las prohibiciones. En cuanto al carácter y el alcance de la prohibición, algunos participantes estaban de acuerdo en que las disciplinas deberían prohibir las subvenciones que redujeran los costos o aumentaran los ingresos, que las prohibiciones debían tener una base amplia y que cualquier excepción debería estar rigurosamente definida. Otros participantes consideraban que la propuesta representaba una prohibición general que iba demasiado lejos. Se observó que tal enfoque daba por sentada una relación causal entre las subvenciones y la capacidad excesiva/sobrepesca. Un participante preguntó si en la propuesta se suponía que existía capacidad excesiva/sobrepesca en todos los países y si los países no afectados por dichas condiciones estarían sujetos a esas disciplinas. Los participantes preguntaron en qué se diferenciaban los criterios relativos a los costos/ingresos del criterio sobre los beneficios del ASMC y si un criterio basado en los costos cubriría las actividades tanto en las fases iniciales del proceso de producción como en las finales o sólo estaba relacionado con la capacidad pesquera. En cuanto a la estructura de las disciplinas, algunos participantes acogieron con satisfacción la idea de una "lista negativa" de subvenciones que no se prohibirían y subrayaron que esto proporcionaría un incentivo para la notificación. Otros participantes señalaron que el sistema de una lista negativa era incompatible con la estructura básica del ASMC, exigiría a los participantes negociar excepciones para los países en desarrollo y las zonas más pobres de sus territorios no daría cabida a nuevos programas. Se indicó que existía la posibilidad de establecer un sistema híbrido que combinara una lista positiva, especificando los tipos de programas que eran más perjudiciales, con una lista negativa para otros tipos de programas y que no se debía tomar una decisión acerca de esta cuestión hasta que no se establecieran criterios sobre las subvenciones que había que prohibir. Un participante señaló que la cuestión de la capacidad excesiva y la sobrepesca era más un asunto de gestión de recursos que de subvenciones.

27. El patrocinador sugirió que los participantes presentaran propuestas sobre los programas que se incluirían/excluirían, las características de dichos programas y la base jurídica para su inclusión/exclusión. La lista negativa tenía por objeto abarcar, de manera transparente, la totalidad de las prácticas y aclarar qué programas estaban comprendidos en el ámbito de aplicación de las disciplinas, las excepciones y los períodos de transición, etc. Con respecto a los regímenes de gestión, aunque en teoría dichos regímenes podían atenuar el efecto de las subvenciones sobre las poblaciones

de peces, en la práctica no era así para la inmensa mayoría de los actualmente en vigor. Quedaba todavía en esta esfera mucho trabajo por hacer en otros foros y no debía ser una tarea primordial en la OMC. A fin de evitar criterios que involucrarían a la OMC en esferas que quedaban fuera de su competencia tradicional, la propuesta se centraría en los criterios económicos de los costos y los ingresos. En cuanto a la distinción entre estos criterios y las disposiciones existentes sobre los beneficios, había, efectivamente, una importante superposición. Sin embargo, podría haber subvenciones que no tuvieran efectos en los costos o los ingresos y que no fueran de carácter comercial. El patrocinador consideraba que merecía la pena examinar más a fondo la relación entre estos tipos de criterios y las disposiciones vigentes en el ASMC.

D. OTROS ASUNTOS

28. El Presidente anunció que la próxima reunión del Grupo se celebraría los días 7 y 8 de junio de 2004. Esta reunión comprendería componentes tanto formales como informales. El plazo para la presentación de nuevas propuestas pormenorizadas informales para su examen en la reunión se cerraría el 24 de mayo de 2004, a la hora de cierre de las oficinas.
